

el art. 17 de la ley del Estado de Yucatan de Julio de 1870 al establecer que las faginas puedan desempeñarse, ó poniéndose sustitutos ó satisfaciendo tres reales por fagina no obliga á trabajo personal, sino que mas bien impone una contribucion á obligacion pecuniaria, cuya contribucion puede imponerse por las legislaturas de los Estados, segun el art. 117 de la Constitucion federal, lo que siendo así no hay violacion de alguna garantía, como la habia en el caso de que no queriéndose poner sustituto ó pagarse los tres reales por fagina se exija el trabajo personal; pues en este caso se violaria la á que se refiere el art. 5º de la Constitucion federal; bajo los conceptos expresados, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada el 25 del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Yucatan, que declara en primer lugar: que la justicia de la Union ampara y protege á los dichos ciudadanos nombrados arriba contra el C. gefe político de Izamal, que quiere obligarlos á cumplir el art. 15 de la ley local de 23 de Julio del año próximo pasado que les exige un trabajo personal sin su consentimiento y sin retribucion; y en segundo lugar: que no los ampara ni protege contra la misma autoridad por la obligacion pecuniaria en vez del trabajo personal que impone el art. 17 de la propia ley.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de Yucatan con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.
—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.
—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.
—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L.

Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis Mº Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por la Sra. Dª María de la Concepcion Gonzalez, contra una orden del ministerio de gobernacion por la que se previene al ayuntamiento de esta capital, que la casa n.ºm. 10 de la calle de San Andres se le adjudique á D. Ignacio Noriega.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez.

El promotor dice: que abierto á prueba el presente juicio, se recibió del C. ministro de gobernacion el informe que corre agregado, y la copia del acuerdo en que se mandó que el ayuntamiento otorgara á favor de D. Ignacio Noriega la escritura de adjudicacion de la casa n.ºm. 10 de San Andres. La Sra. Gonzalez, con su prueba presentó el testimonio de la adjudicacion de la finca que hizo á su favor el C. juez Mariano Navarro el año de 1856, y que devolvió el año de 1859, el certificado de la alcabala pagada cuando se le adjudicó la finca; varios recibos de diversas cantidades pagadas al hospital de San Andres: la fé de bautismo de la Sra. Gonzalez; la de defuncion de sus padres; un oficio del C. ministro de hacienda, de 19 de Marzo de 1868 en que se le comunicó el acuerdo del C. presidente, de que no pudiendo acceder á su pedido de que se le pusiera en posesion de la finca, debería ocurrir á los tribunales, y la copia del ocurso que presentó al ayuntamiento en 23 de Agosto de 1869 pidien-

do se le mandara otorgar escritura de propiedad de la relacionada finca. La Sra. Gonzalez reclamando en vía de amparo la providencia del C. ministro de gobernacion, ha designado como garantías violadas las concedidas por los artículos 14, 16 y 27 de la Constitucion. Examinado el acto que dió origen al amparo, este es á todas luces improcedente, y basta una ligera historia de la finca para convencerse de esta verdad. Adjudicada el año de 1856 á la Sra. Gonzalez, la devolvió el 59; y sin bien es cierto que sin perjuicio de tercero podia disfrutar del indulto que concedia la ley de 5 de Febrero, necesitaba la declaracion para su caso, que si no la obtuvo á su tiempo, y suponiendo buenos sus derechos para hacerla efectiva, mientras esto suceda solo tiene derechos de preferencia que deducir á la finca, pero no tiene la propiedad de la misma, y hay diferencia entre tener derechos á la cosa y la propiedad de ella.

Desamortizada por el Sr. Limantour como denunciante, fué declarada nula la operacion por el supremo gobierno y mandado que volviese á poder del ayuntamiento; lo que reclamado en un principio por él, al fin fué consentido. Como la corporacion municipal no podia conservar bienes raíces, el gobierno tenia que hacer á favor de alguno de los que alegaran derechos á la finca la adjudicacion; y teniendo en consideracion que D. Inigo Noriega era sub-inquilino, como lo comprobó con un certificado del C. Lic. Sebastian Lerdo de Tejada, que acreditaba que con tal carácter solicitó la adjudicacion por la devolucion que habia hecho la Sra. Gonzalez, sin prejuzgar los derechos de esta señora, ni cualquiera otros preferentes é ignorados, la acordó á favor de D. Inigo Noriega. Visto que la Sra. Gonzalez no tiene mas que derechos, no puede haber violacion de ninguno de los artículos citados, y sin considerar ningunas de las pruebas de la Sra. Gonzalez, que son inconducentes, la principal, que es el oficio del C. ministro de hacienda, contiene un

acuerdo que mas tarde pudo reformarse; pero para su nulidad basta tener presente, que tratándose de bienes de beneficencia como son los de un hospital, tocaba en conocimiento al ministerio de gobernacion, y lo hecho por otra secretaría era nulo conforme á los principios constitucionales. Por esto no hay infraccion del art. 14, pues el C. ministro de gobernacion, con acuerdo del C. presidente, no obró como juez dirimiendo en contienda los derechos de preferencia de todos los interesados, sino solo administrativamente, aplicando una finca vacante al que calificó, con buen derecho para la adjudicacion; pero dejando á salvo los derechos preferentes. El art. 16 tampoco ha sido infringido, pues no se ocupó propiedad alguna de la Sra. Gonzalez, y el gobierno menos la tomó para sí, supuesto que el valor de la finca es igual en cuanto al reconocimiento á la beneficencia, sea quien fuere adjudicatario, razones que tambien son extensivas al art. 27.

Podria hacer mas difusos estos apuntes, pero comprendiendo todo lo que pudiera decirse del informe del C. ministro de gobernacion, del cual llamo la atencion del juzgado, le pido declare: que no procede el amparo y que quedan á salvo los derechos que tenga la Sra. Gonzalez á la finca.

México, Octubre primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Herrera Campos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Octubre diez de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo seguido ante este juzgado primero de Distrito, á solicitud de Doña María Concepcion Gonzalez, la que asegura que se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitucion general de la República por el ministerio de gobernacion, al dictar su resolucion por la que se previene, que la casa núm. 10 de

la calle de San Andres, se le adjudique por el ayuntamiento de esta ciudad á D. Inigo Noriega; y vistas las diligencias practicadas, pruebas rendidas, alegatos de la quejosa, y pedimento del C. Promotor, de todas estas constancias resulta: que segun el escrito de la Gonzalez, en el año de mil ochocientos cincuenta y seis era inquilina de la casa mencionada; que con arreglo á la ley de 25 de Junio de ese año, se la adjudicó; que en el año de mil ochocientos cincuenta y ocho se la devolvió al clero; que en el año de mil ochocientos sesenta y uno volvió á adquirir sus derechos como adjudicataria; que no pidió la adjudicacion y posesion de ella, por que el gobierno declaró ser dueño de la dicha casa D. José I. Limantour; que despues el gobierno declaró nula la adjudicacion de Limantour y devolvió la casa al ayuntamiento para que la adjudicase á quien correspondiere; que ocurrió hacer valer su derechos ante el ayuntamiento sin que se despachara su ocurso, y que habiendo pedido el expediente el ministerio de gobernacion dió la resolucion que ha motivado el amparo; que pidiendo el informe con justificacion al ministerio manifestó, que anulada la adjudicacion hecha á favor de Limantour, el gobierno tomó en consideracion las denuncias que se habian hecho de la casa, y siendo Noriega el mas antiguo, y á la vez subinquilino, se prefirió á él con arreglo al art. 10 de la ley de 25 de Junio de 1856, teniendo presente el pár. 2º del art. 27 de la Constitucion;

Que la Gonzalez no ocurrió á la defensa de sus derechos, ni podia ocurrir en virtud de la prevencion del art. 1º de la ley de 4 de Marzo de 1861, y de su aclaracion de 19 de Abril del mismo año, sin que le pueda favorecer la circular de 28 de Marzo de 1862, por quedar determinado que todos los derechos de los adjudicatarios quedaban prescritos si eran en contra del gobierno; que las cuestiones de preferencia se deben resolver por la autoridad judicial,

y la administrativa, solo hace la declaracion que cree justa, en virtud de las solicitudes que presenten los denunciadores, sobre lo cual hay infinidad de expedientes, y que no se ha molestado á la Gonzalez en la posesion de la casa, porque ella no la ha tenido sino el gobierno; que recibido este negocio á prueba, la Gonzalez probó que en el año de 1856, se adjudicó la casa núm. 10 de la calle de San Andres, como inquilina de ella; que es hija legítima de D. Angel Gonzalez y Doña Guadalupe Romaná; que habiendo ocurrido al gobierno pidiendo la posesion de la casa, se le previno que ocurriese á los tribunales; que es soltera; que hace mas de veinticinco años que vive en la casa; que fué la única que se adjudicó; que se la arrendó á D. Inigo Noriega, y que en la actualidad vive en ella; que si bien el art. 14 previene que no se podrá expedir ninguna ley retroactiva, y que nadie puede ser juzgado y sentenciado, sino por ley dada con anterioridad al hecho y aplicada por tribunal establecido previamente; la Gonzalez no ha justificado que el ministerio al dictar la resolucion de ocho de Agosto haya dado una ley retroactiva que la afecte, ni ha pronunciado sentencia en su contra, constituyéndose en tribunal, pues al dictar la resolucion de ocho de Agosto no excluyó los derechos de ella, ni dijo que no fueran escuchados ante los tribunales judiciales, sino que solo hizo una declaracion que creyó justa, en virtud de las denuncias expresadas en su informe: que, "las cuestiones relativas á la preferencia de derechos, como en la que promueve la Sra. Gonzalez, se resuelven y deben resolver por la autoridad judicial," por lo que no ha sido infringido; que ménos puede decirse que se ha infringido el art. 16, porque no habiendo probado la Gonzalez, que tenga la propiedad y posesion de la casa, pues solo habla de derechos, no puede haber sido molestada en su persona ni en su domicilio, mas particularmente cuando ella confiesa, que des-

pues que devolvió la casa al clero, no se la ha vuelto á adjudicar; que si no ha sido declarada propietaria por la autoridad competente, suponiendo que hubiese sido ocupada la casa núm. 10 de la calle de San Andres, no se necesitaba su consentimiento, y en este caso no puede asegurar que se han violado en su persona las garantías que otorga el art. 27; que las pruebas de la quejosa rendidas en este juicio serán muy eficaces para que deduzca sus derechos ante el tribunal competente, segun está prevenido en el art. 23 de la ley de 5 de Febrero de 1861; que si bien la Sra. Gonzalez invoca el indulto que le concedió el art. 5º de la ley citada, como no ha presentado la declaracion respectiva, solo tiene derechos de preferencia que deducir á la finca y no la propiedad de ella; y que no puede dudarse que hay suma diferencia entre tener solo derechos á tener la propiedad de una finca, pues si esta hubiera sido acreditada, otros serian los derechos de la Gonzalez.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion y de la ley de 20 de Enero de 1869;

Fallo:

Que la justicia federal no ampara á Doña Concepcion Gonzalez en contra de la resolucion de ocho de Agosto de este año, del ministerio de gobernacion, por la que mandó que el ayuntamiento de esta ciudad adjudicase la casa núm. 10 de la calle de San Andres á D. Iñigo Noriega, condenándose en el minimum de la multa que asigna dicha ley.

Hágase saber, sáquense copias de esta sentencia para que se publique en el "Diario Oficial" y "Semanario Judicial," y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo mandó y firmó el C. juez 1º de Distrito, Lic. José Isaac Sancha.—Doy fé.—*J. I. Sancha.*—*Joaquín Sanchez Gonzalez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México, por la Sra. Dª María de la Concepcion Gonzalez, contra una orden del ministro de gobernacion por la que se previene al ayuntamiento de esta capital que la casa núm. 10 de la calle de San Andres se le adjudicase á D. Iñigo Noriega, alegando la peticionaria que con dicha orden se violan las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitucion federal de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que el ministerio de gobernacion, al devolver el expediente sobre la casa núm. 10 de la calle de San Andres al ayuntamiento de esta capital, para que este adjudicase la expresada finca con arreglo á las leyes, no se limitó á declarar que por no subsistir la enagenacion en favor de Limantour, quedaban expeditos los derechos de todos los que pretendian la misma casa para deducirlos en juicio, sino que ademas se ocupó en resolver lo que le pareció conveniente sobre la preferencia de los mencionados derechos, preocupando y decidiendo las cuestiones sobre propiedad y posesion en favor de uno de los litigantes; y

Considerando: que con este procedimiento se han invadido las atribuciones del poder judicial y se han atacado las garantías individuales de los interesados. Con fundamento del art. 16 de la carta federal de la República, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado 1º de Distrito de esta capital, en la cual se le negó el amparo á la quejosa; y se declara: que la justicia de la Union ampara y protege á Dª Concepcion Gonzalez.

lez contra la órden del ministerio de gobernacion, á que se refiere el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por el C. Otero Chavira, contra la órden del ministerio de gobernacion, de 8 de Agosto de este año, por la que se previene al ayuntamiento de esta ciudad se adjudique á D. Frigo Noriega la casa núm. 10 de la calle de S. Andres.

No se publica el pedimento fiscal, la sentencia del C. juez de Distrito y la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, por ser sustancialmente iguales al pedimento, sentencia y ejecutoria anteriores.

CONSULTA.

Sobre revision de sentencias en los juicios civiles y criminales que se siguen en los juzgados y tribunales de la federacion.

El tribunal de Circuito de Guadalajara con fecha 10 de Agosto, remitió á esa Corte Suprema de Justicia la siguiente copia.

“Guadalajara, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Se aprueba el auto que en 13 de Julio del año próximo pasado pronunció el juez de Distrito de Zacatecas, en que mandó sobrescer en esta causa instruida contra el C. Lic. Apolonio G. de la Cadena y socios. Hágase saber á dicho juez.

Y en cuanto á la peticion del C. promotor, relativa á la remision, para el objeto que indica, de esta sumaria á la Corte Suprema de Justicia, no se accede á ella, porque este tribunal estima no vigente la ley de 14 de Febrero de 1826, en razon de haberse sancionado bajo las prescripciones de la Constitucion de 1824 y haberse expedido posteriormente otras relativas á tribunales federales, como la de 22 de Mayo de 1834, en que se refundió la de 20 del mismo mes y año de 26, la cual no impone tal obligacion; corroborando este tribunal su juicio en este respecto:

Primero; en que en las atribuciones que la Constitucion general de 1857, concede á la Corte Suprema de Justicia, no se encuentra la de revisar los actos ejecutoriados de los tribunales de Circuito; y

Segundo; en que en ninguna de las sentencias pronunciadas por estos y publicadas en el “Semanario Judicial de la Federacion,” ha visto el magistrado que suscribe que se disponga hacer la remision de las causas civiles y criminales á dicha Corte Suprema, excepto en grado, ó las copias de las sentencias en los términos que lo previene en su circular de 31 de Diciembre de 1870.